

Como citar este documento: Velázquez García, Mario Alberto. **Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe.** *En publicación: Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe.* Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2003.

Acceso al texto completo:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2002/mov/velazquez.pdf>

Descriptores Tematicos: Organizaciones Ambientales, sociología de las organizaciones, Red Nacional de Acción Ecológica, Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental, Repertorios (recursos) de confrontación, Estructura de oportunidades políticas y redes, México, Argentina, América Latina

“Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe”

Mario Alberto Velázquez García

*Programa Regional de becas CLACSO/Asdi, 2002-2003.
El Colegio de Sonora*

MOVIMIENTOS AMBIENTALES, RECURSOS Y OPORTUNIDADES POLÍTICAS EN MÉXICO Y ARGENTINA

Resumen: En este artículo se describen y analizan las transformaciones que tienen las organizaciones ambientales en sus formas de operación y organización mediante la Teoría de Movilización de Recursos. Para ello se toma el caso de la Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE) en Argentina, y la Red Nacional de Derechos a la Información Ambiental en México. Este trabajo se vincula a la discusión sobre las formas de participación social.

CONCEPTOS CLAVE: Organizaciones Ambientales, sociología de las organizaciones, Red Nacional de Acción Ecológica, Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental, Repertorios (recursos) de confrontación, Estructura de oportunidades políticas y redes.

INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica, el espectro político estaba cubierto por los sindicatos, el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones campesinas y la iglesia. Para principios de los ochenta la sociedad civil comienza a crecer hasta consolidarse como un actor importante, siendo las organizaciones ambientales uno de sus grupos más relevantes.

A pesar del aumento en el número y la importancia de dichas Organizaciones Ambientales (OA), todavía son pocas las investigaciones al respecto. Si bien existen varios estudios de casos latinoamericanos, todavía son pocos los trabajos comparativos o que analizan aspectos más generales de la región (véase: Themudo, (2000), Leff, (1998), Alfie, (2000), Jelin, (2003), Nicholls, (2001)).

La presente investigación busca aportar en el análisis sobre cuál es la situación de los grupos de la sociedad civil en Latinoamérica. El punto de interés son los cambios difundidos en los recursos o formas de organización de los grupos ambientales en

México y Argentina. Entendiendo por recursos, todos los medios tanto materiales como simbólicos utilizados para el logro de sus objetivos; en este sentido, las formas de organización son un recurso para sus fines (Tilly, 1995 y Tarrow, 1997).

El punto de interés son las organizaciones ambientales, no el movimiento ambiental, esto se debe a que este último concepto puede prestarse a confusiones; para hablar de un movimiento ambiental, tendría que existir coherencia entre los diferentes grupos y objetivos comunes, cosa que no ocurre (Hjelmar, 1996). El análisis entonces, en términos generales, es de sociología organizacional sobre el funcionamiento de redes. Entendiendo por redes los flujos de información entre organizaciones, así como la planeación de eventos y el logro de objetivos (Provan y Milward, 1995). El propósito principal es observar el funcionamiento operacional de una “comunidad de intereses”, lo que deja la investigación en un nivel intermedio entre lo “macro” y lo “micro” social; es decir, no es el tema analizar las organizaciones que constituyen a la Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE) y la Red Nacional de Derecho a la Información (RNDIA), sino los flujos de información como recursos para la acción social. Es importante hacer esta aclaración porque, al componerse las redes de varias organizaciones, se pueden ver en ellas el interés principal, sin embargo esto no es así; el escrito tiene como casos de estudio a dos organizaciones conformadas por varias organizaciones con el propósito expreso de ver el trabajo “agregado” que representa el funcionamiento de la red.

Una teoría que nos permite analizar, no sólo, de qué tipo son las transformaciones en las formas de organización y de operación de las organizaciones sociales, sino sus consecuencias en tanto medios para lograr sus objetivos es: la Teoría de Movilización de Recursos (TMR). Los conceptos centrales que retomaremos de la TMR, principalmente de los trabajos de Tilly y Tarrow, son: los repertorios o recursos para la movilización, las oportunidades políticas y las redes. El tema que está detrás del trabajo son las oportunidades desiguales de participación que los diferentes actores sociales tienen para la configuración de las políticas públicas, en este caso, relativas al ambiente.

Primero se hace una breve discusión sobre la función de las estas organizaciones en las sociedades Latinoamericanas, posteriormente se encuentra una descripción de la metodología de tipo comparativo que se utilizó. A continuación se exponen las características generales de los dos casos de estudio: la RENACE en Argentina y la RNDIA en México. Sigue una presentación de apuntes sobre la Movilización de Recursos y la estructura de oportunidades políticas. Estos elementos serán retomados en la parte del análisis.

APUNTES SOBRE LA DEFINICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

AMBIENTALES EN LATINOAMERICANA Resulta muy difícil tratar de definir a las Organizaciones Ambientales (OA) por las diferencias que existen en el número de miembros, formas de trabajo, modelos de desarrollo o ideología. Por lo anterior, más que partir de una definición específica sobre las OA las voy a considerar como la forma de organizarse que se da dentro de lo ambiental, entendido el último como un marco de interés que permite la participación, tanto de “viejos” actores sociales como de nuevos grupos (García- Guadilla, 1994). Al partir de un horizonte no previamente definido, no existe contradicción en que en existan grupos ambientales con posturas ideológicas tanto de derecha como de izquierda así como posiciones gradualistas como revolucionarias, así como grupos conservadores.

Las áreas de interés de las OA se han ido transformando. En un primer momento el énfasis estuvo en la conservación de regiones o de especies, así como en problemas particulares que provocaban la contaminación del ambiente.

Posteriormente, con el crecimiento en número y su especialización, comenzó un creciente interés en la construcción y aplicación de leyes cada vez más estrictas y finalmente, surgieron organizaciones que cuestionan el modelo de desarrollo económico por ser altamente contaminante (Torres, 1998). Lo anterior no significa que todas las OA sigan este proceso, sino que existe una tendencia a que estos temas tomen más notoriedad.

Las OA de la región presentan profundos contrastes: lo mismo existe un sector altamente integrado con agrupaciones ambientalistas internacionales y agencias de cooperación, con acceso a recursos humanos y financieros, que organizaciones totalmente aisladas con recursos escasos y únicamente interesadas por problemas locales. De igual modo, la diversidad de personas, intereses y pensamientos que integran a las OA las hace un movimiento social altamente complejo donde se unen luchas por la vivienda, la salud y la alimentación. Al mismo tiempo que se entrelazan reivindicaciones culturales, políticas o religiosas.

Un estudio importante sobre los factores que determinan la estructura de las OA es el realizado por Bordt (1997), quien demostró que la ideología, las metas, el ambiente y el tamaño del grupo son determinantes. Uno de los elementos exógenos a considerar en el caso de las organizaciones sociales en Latinoamérica es el Estado. A este respecto Natal (1999) propone que una de las consecuencias de la creciente relación de las organizaciones civiles con el Estado es la burocratización de las estructuras de participación.

Las OA, como parte de la sociedad civil, pueden ser consideradas como una de las formas generales de organización en la sociedad (Bobbio, 1989). Desde esta perspectiva las organizaciones son divididas por su función central: el primer sector busca regular la vida y las acciones de los ciudadanos, así como dirigir la forma en que buscará su desarrollo. El segundo grupo busca crear riqueza y con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Por su parte el tercero persigue intereses personales o sociales, creencias y preocupaciones individuales. El primer sector es el gubernamental, el segundo el de negocios y el tercero es el de la sociedad civil (Fowler, 1996).

En países con sistemas democráticos, las relaciones entre estas tres esferas se pueden representar mediante esferas que se encuentran en contacto en sus bordes, pero que guardan una lógica de funcionamiento separadas. Fowler (1996) propone que en los países en vías de desarrollo, la esfera gubernamental tendría que ocupar un espacio mayor, y en su interior, se pueden localizar a las otras dos, pues la acción del gobierno es todavía determinante para el comportamiento de los otros dos sectores. Esta forma de representación, se basa en un modelo “funcional normativo de equilibrio” (Trivedy y Acharya, 1996).

México y Argentina, dos de los países en que se presentó un crecimiento significativo de los grupos que conforman la sociedad civil, atraviesan una transformación de sus economías hacia la integración en bloques comerciales. En 1991, Argentina Brasil, Paraguay y Uruguay (además de Chile y Bolivia como asociados), firmaron un acuerdo

para la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), por su parte, México firmó con Canadá y Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994. La apertura de las economías al libre comercio implicó una serie de cambios en la sociedad. Los respectivos gobiernos redujeron su tamaño, el gasto social y de inversión, así como una venta masiva de sus industrias paraestatales. Los resultados de estos cambios para el año 2003, no son los anunciados: la pobreza en la región no ha hecho más que aumentar, las economías se encuentran en una continua posibilidad de colapsarse y comienzan a hacerse visibles los daños causados por una explotación irracional de los recursos no-renovables. La crisis por la que transcurre Argentina es sólo una muestra del fracaso del modelo.

La planeación y uso consensuado de los recursos naturales de una región son parte de la re-definición actual sobre la política. En este sentido, lo ambiental en América Latina también significa la búsqueda de nuevos esquemas de generación de políticas, bajo el supuesto de que una de las consecuencias de los regímenes autoritarios ha sido una seria de degradación y uso irracional de los recursos naturales (Leff, 1998).

La situación anterior representa un reto para las OA: en situaciones de recesión o crisis de una economía lo ambiental tiende a convertirse en un tema secundario frente a la urgencia de lograr el desarrollo económico. Es conveniente entonces preguntarse: ¿Cómo se organizan los ciudadanos cruzando los límites de los Estados? ¿Qué tanto influye la organización social frente a la toma de decisiones en el ámbito regional?

A. EL TERCER SECTOR Y EL MEDIO AMBIENTE

I. RENACE, UNA RED DENTRO DEL MOVIMIENTO AMBIENTAL ARGENTINO

La Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE) surge en 1985 como un proyecto para reunir OA de toda la Argentina. Para el año 2003, cuenta con 79 organizaciones en 17 provincias. El objetivo central de la organización es: "...la distribución de información actualizada, el apoyo entre grupos ante situaciones de conflicto, la generación de campañas ambientales regionales o locales, el intercambio de experiencias y de logros en el medio ambiente de las acciones ciudadanas" (RENACE, 2003)

Algunas de las organizaciones que forman la red son: Acción por la biodiversidad, Grupo de Reflexión Rural, Ambiente Sur, Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Bios Argentina, Comisión Ecológica Ituzaingo, Fundación Norte Ecológico, Movimiento Ambientalista Rosaleño (MAR), Vecinos por la Vida, Grupo Ecologista Ohaco, Foro Ecologista de Paraná, Grupo de Protección Ambiental Formosa y Centro Ecologista Renacer, entre otros.

En el momento en que surge esta red, Argentina atraviesa una profunda crisis económica, en gran parte explicable por los actos de corrupción de funcionarios del gobierno y el retroceso de la economía mundial. Los problemas de tipo financiero se han visto acompañados por un desencanto sobre la democracia y los mecanismos tradicionales de representación y participación social. Este escenario favoreció la participación dentro de organizaciones independientes de cualquier filiación política o de partido, así como la creación de redes de solidaridad para afrontar las consecuencias de los problemas económicos.

A un año de su fundación la red organizó reuniones semestrales en diferentes ciudades¹ de Argentina. En un principio, las asambleas fueron realizadas de forma semestral, pero las grandes distancias entre las diferentes provincias y los problemas económicos generales obligaron a que se realizaran de forma anual².

Los lugares de reunión han ido recorriendo diferentes localidades tratando de facilitar la asistencia de todos los grupos. En las asambleas se realizan mesas de trabajo para la discusión de los temas que sean considerados urgentes. En cada reunión se decide también la incorporación o baja de los grupos (RENACE, 2003 y e-agenda, 2001). La rotación de la sede de las reuniones, permite que el costo que significa su organización se distribuya entre las organizaciones, además de permitir que los otros miembros conozcan presencialmente cuáles son las condiciones en las que se encuentra la problemática que tiene cada grupo.

En palabras de la misma organización: “El trabajo en red funciona cuando una Organización No-Gubernamental (ONG) necesita apoyo para una campaña problema-juntada de firmas- requerimiento de asesoramiento técnico o legal búsqueda de material, datos o información (RENACE, 2003). La solicitud de apoyo o de información es enviada a todas las organizaciones por medio de un boletín y cada organización responde según sus propias posibilidades.

La RENACE cuenta con una coordinación general que distribuye la información a las OA de las que a su vez, recibe la misma información que distribuye; basa su funcionamiento operativo en el Internet, lo que le permite tener cobertura en todo el territorio argentino. Cumple varias funciones: 1) permite un acceso continuo a información relacionada con el ambiente y otros temas de interés para los miembros. La red le permite a sus miembros solicitar informes útiles o relevantes para sus intereses, así como estar al tanto de cualquier tema nuevo o problema; 2) hace posible la organización y difusión de eventos organizados por las OA, así como también de otros grupos o del gobierno. Por medio de la RENACE se ha invitado a participar a grupos estudiantiles, agrupaciones obreras, vecinales y docentes³; y 3) construye un foro virtual para la discusión de problemas o decisiones coyunturales sin la necesidad de realizar grandes traslados.

Para la construcción de un foro virtual, cuenta con un Boletín que se publica en la red semanalmente, o antes si se considera necesario. Este es el principal mecanismo de difusión de las actividades de los distintos miembros de la red, de las reuniones con instancias de gobierno, los problemas, las solicitudes de información o de apoyo (RENACE, 2003). Por otro lado, aunque su actividad es concebida para que exista un flujo horizontal de información existen liderazgos reconocidos que, si bien no restringen ni censuran, ocupan una posición de autoridad.

Respecto a la información que circula en la red, no toda es de acceso a todo el público, existe una parte que está restringida para aquellos que son miembros de la asociación o que cuentan con un permiso para acceder. Esto se convierte en un recurso estratégico, si consideramos la desconfianza que existe hacia los partidos políticos y el gobierno por diversos actos de corrupción e intentos de infiltrarse. En 1994 se realizó una reforma a la Constitución Argentina, que entre otras cosas, incorporó mecanismos de control y fiscalización a los actos del gobierno. Así, se creó la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y se transformó el proceso de selección de jueces mediante la

creación de un Consejo de la Magistratura. Todas estas instancias, abrieron nuevas posibilidades a la participación ciudadana. Sobre la participación más directa de los ciudadanos, se aprobó la posibilidad de presentar proyectos de ley, la consulta popular sobre proyectos legislativos y la participación de ciudadanos en los organismos relacionados al consumo (Kohen, 1998).

Aprovechando las posibilidades abiertas por los cambios constitucionales en 1996 se funda la organización Poder Ciudadano (PC) con el objetivo de vigilar y fiscalizar los gastos de distintos órganos de gobierno (Kohen, 1998). Uno de los programas donde PC fue en el Consejo de Organizaciones y el Consejo Asesor. El primero, formado por 20 organizaciones civiles, buscaba supervisar actos o políticas gubernamentales que atenten contra el medio ambiente, los consumidores o discriminaran a sectores de la población. Por otra parte, el Consejo Asesor tiene como objetivo la fiscalización de los recursos públicos.

Por su parte, la RENACE ha especializado su actuación a la ambiental, entre sus objetivos principales esta realizar monitoreos a programas o proyectos públicos y la difusión de opiniones y estudios sobre cuestiones relacionadas. La red funciona como un “puente” que permite convocar a la participación de diferentes sectores de la sociedad, así como para promover y organizar eventos públicos sobre problemas ambientales. Entre sus miembros, se encuentran algunas de las organizaciones y actores más reconocidos del ambientalismo argentino.

La RENACE busca aglutinar todos los temas que se consideren importantes en materia ecológica, algunas de las áreas que por su impacto nacional han dado más notoriedad a la red son: 1) los alimentos transgénicos; 2) la instalación de una planta de desechos radioactivos provenientes de Australia⁴; 3) La lucha del pueblo Mapuche-Tehuelche al noroeste del Chubut; 4) la instalación de nuevos basureros en la zona metropolitana de Buenos Aires.

Una de las tácticas principales de la RENACE es tratar de difundir las acciones del gobierno que consideran contrarias al interés público. Para ello, la misma red es un medio importante, pero también buscan difundir sus posturas en los medios de información y en otros países. Otro de los recursos que utilizan es lo que se conoce como “lobby” es decir, buscar reuniones con funcionarios de alto nivel a fin de exponerles sus posturas y hacer sugerencias alternativas

Cada organización que pertenece a la red, está especializada en un problema o tema ambiental, en muchos casos, se trata de asuntos locales. La mayoría de los miembros que coordinan la RENACE son personas con estudios y en muchos casos, con antecedentes de participación en organizaciones políticas o sociales.

Esta experiencia previa se convierte en un recurso importante para la realización de tareas como el “lobby”; pues existe un aprendizaje ya asimilado sobre formas de organización y de reacción, así como contactos previos y conocimiento de los diferentes grupos y personajes “claves” para el cabildeo. Por otro lado, son actores que se encuentran relacionados con agrupaciones dentro y fuera del país que, en cualquier momento, pueden ser de utilidad para la red. Respecto a la preparación profesional de los miembros, esto se convierte en un recurso individual que en ocasiones significa el

acceso a datos técnicos sobre cuestiones ambientales de importancia para su comprensión.

La RENACE, como la mayoría de las organizaciones que la componen, mantiene hacia el gobierno una postura de distancia y de crítica; si bien se considera importante mantener un diálogo permanente. Esto resulta coherente con la mala impresión general de la sociedad por los actos de corrupción y de malos manejos de la clase política Argentina. Sin embargo, existe una impresión diferente hacia los gobiernos locales en algunos casos.

Como para la mayoría de los grupos que la constituyen, los recursos económicos son un problema constante de la red. El financiamiento externo aunque es una posibilidad, es escaso y difícil de mantener durante largos periodos de tiempo. Los miembros de los diferentes grupos participan sin percibir ningún sueldo y por el contrario, requieren aportar parte de sus ingresos para sostener a la organización. En pocos casos la participación en la sociedad civil podía ser su única actividad, pues es necesario tener un trabajo del que pudieran vivir.

Los logros de la RENACE son varios si consideramos lo que los diferentes grupos que la componen han hecho: 1) la revisión sobre la constitucionalidad de acuerdos sobre desechos en la corte de justicia de Australia; 2) detener la construcción de un depósito para desechos nucleares de GASTRE, en Chubut; 3) que se dieran sanciones a la compañía Shell por contaminación en la estación de servicio Lima e Independencia en Buenos Aires; 4) detener la explotación minera en la zona de Esquirol por daños al ambiente; 5) contar con participación en las pláticas del ALCA entre otros. Un logro importante de la red de diferente orden que los anteriores es abrir el contenido de las pláticas que los diferentes grupos tienen con las diferentes instancias de gobierno, lo que le otorga una confiabilidad horizontal importante y le dificulta al gobierno intentar actos de cooptación o de corrupción en sus reuniones con los grupos ambientales.

Frente a su interés por difundir los distintos problemas ambientales, la red y el resto de los grupos ambientales se enfrenta con que los medios de comunicación no siempre se encuentra interesados, además de existir una visión general de los miembros de la RENACE acerca de que el gobierno tiene un fuerte control sobre los principales periódicos y la televisión. Esto hace muy difícil la aparición de noticias sobre problemas ambientales ocasionados por el mismo gobierno. Por el otro lado, la crisis ambiental ha convertido a la población, en general, poco receptiva a los temas ambientales y más preocupados por la recuperación de sus salarios. La falta de interés general en el ambiente y la poca capacidad de movilización social de los grupos ambientales es una de las razones de porque la red concentra sus esfuerzos en la presión directa al gobierno.

Dado que algunas de los movimientos ambientales nacen con un objetivo muy concreto, las organizaciones muestran poco interés por los problemas más generales o la planeación al largo plazo. La RENACE trata de cambiar esta situación y se constituye como un espacio de discusión de propuestas más globales.

La función de estas organizaciones ambientales, es ser “vigilantes” o “señales de alarma” para el resto de la población de problemas ambientales. Las organizaciones reconocen no tener el poder suficiente para poder transformar las cosas, por lo que les es necesaria la participación mayoritaria de la gente. Actualmente la red está formando

colaborando en la construcción de “El Observatorio Ambiental Latinoamericano” que busca reunir redes de diferentes países de la región.

II. LA RED NACIONAL DE DERECHO A LA INFORMACIÓN UNA RED MEXICANA

Para los grupos ecologistas en México el periodo de 1989 a 1994 presenta una ola de activismo ambiental en la zona de la frontera norte. El momento más importante de este ciclo de movilizaciones se produce en 1992 cuando está a punto de firmarse el TLC (Verduzco, 2002). Uno de los objetivos de este movimiento, era el acceso a la información relativa a la producción, almacenamiento y transportación de materiales peligrosos. Dado que esta información es pública en EU desde 1986 y en Canadá desde 1993, se esperaba que el tratado de comercio obligara al gobierno mexicano a la apertura de sus datos.

Los gobiernos de México, EUA y Canadá, en parte debido a la presión de los grupos ecologistas y en parte por su propio interés por las cuestiones ambientales, acordaron crear tres instituciones ambientales; dos encargadas únicamente de la infraestructura para lo ambiental en la frontera. La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), el banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan). La tercera es la Comisión para la Cooperación Ambiental, con sede en Montreal (CCA) Esta última es una instancia para la protección del ambiente en los tres países. (Liverman, et. al, 2002)

La CCA fue un factor importante para que el gobierno mexicano incluyera Derecho a la Información (DI) como objetivo dentro de su agenda oficial. Para 1997, México estableció un sistema nacional de información sobre desechos industriales. Sin embargo, el sistema no tenía un carácter obligatorio y tuvo una pobre respuesta pues sólo el 5% de las industrias lo adoptaron.

Al convertirse Vicente Fox en presidente de México, nombró al ex-director Ejecutivo del CCA, Victor Lichtinger, Secretario del Medio Ambiente. Dado que la creación de una legislación para el DI fue una de las metas de la organización que anteriormente encabezara Lichtinger, era de esperarse una pronta solución. Sin embargo, en el primer año de la nueva administración no se avanzó mucho en la Creación del Registro de Emisiones Contaminantes, principalmente porque el gobierno alegaba falta de recursos y no contar con el equipo humano suficiente. Un factor que cooperaba con el retraso es el poco interés de la prensa por cubrir este tipo de cuestiones ambientales, sobre todo, frente a la enorme atención que generaban las actividades del nuevo presidente.

La creación de redes y entablar relaciones con organizaciones en EU y Canadá es una de las características del movimiento ambiental fronterizo. Algunas de las redes que se han creado son: the Binational Health and Environmental Coalition of Ambos Nogales; The International Sonora Desert Alliance; The Texas Center for Policy Studies; The Southwest Organizing Project of Environmental Justice; Concerned Citizens, entre otras (Verduzco, 2002; Liverman, et. al, 2002).

La presión de los grupos ecologistas de Estados Unidos y de Canadá comenzó a ser más fuerte. Esto fue evidente en una mesa organizada por la CCA en marzo del 2001, donde se cuestionó la voluntad del gobierno mexicano por hacer crear un registro de

contaminantes. Los grupos mexicanos presentes en el evento expresaron su interés por buscar otras alternativas para compartir información.

A fines de año, el gobierno federal presentó la propuesta para la creación de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Las organizaciones ambientales, realizaron una intensa labor de cabildeo con los diputados y senadores. Participaron entre otros grupos: Informa, Proyecto Fronterizo para la Educación Ambiental, Enlace Ecológico de Agua Prieta y el Comité Cívico de Divulgación Ecológica y Greenpeace de México (Nauman, 2003).

El 15 de diciembre de 2001, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la ley ambiental para crear el RETC con carácter de obligatorio. Esta fue la primera ley federal mexicana que incluía el acceso público a la información de los registros gubernamentales (Nauman, 2003). En el mismo mes, se fundó La Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental (RNDIA). Al igual que en caso de la RENACE muchos de los principales organizadores de la red, eran gente con preparación universitaria. En este caso varios estaban directamente relacionados en su trabajo cotidiano con cuestiones del medio, como biólogos, químicos entre otros.

Su creación se dio en el marco del II Encuentro Nacional de Ecologistas, donde participaron 50 organizaciones de 26 estados del país. Para su organización participaron Alternativa Ciudadana 21, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., Presencia Ciudadana y la Unión de Grupos Ambientalistas (CCA, 2003). Algunas de las ventajas que los grupos canadienses y norteamericanos veían en crear una red en México eran las siguientes: 1) permitiría el monitoreo constante sobre la actuación de la autoridad; 2) facilitaría la capacitación y crecimiento del número de activistas; 3) mejoraría la comunicación entre ONG; 4) permitiría construir una estrategia de medios masivos de comunicación; 5) sería un foro para analizar la política de educación y salud; y 6) ayudaría a cabildear el derecho a saber con funcionarios clave. (CCA, 2003)

La Red ha tenido problemas de funcionamiento por carencias administrativas. Sin embargo, continua funcionando y actualmente como parte de la Unión de Grupos Ambientalistas (UGAM) cuenta con 75 organizaciones. Las funciones principales de la red son: 1) solicitar información al gobierno sobre desechos; 2) capacitar a organizaciones locales sobre como solicitar la información; 3) promover el acceso a los datos sobre desechos contaminantes; 4) crear un foro de contacto por el Internet; 5) mejorar los mecanismos legales de acceso a los datos oficiales. La UGAM cuenta con libros sobre temas de ecologías y artículos disponibles en la página de Internet, así como un reglamento sobre el acceso de nuevos miembros, código de ética y reglas que rigen la actuación de las organizaciones que participan.

Como parte de la UGAM la red cuenta con la membresía de las siguientes organizaciones: Comisión Ambiental Metropolitana; Centro Mexicano para la Filantropía; Consejo de la Sociedad Civil; Red para el Desarrollo Rural Sustentable; Red para la Infancia y la Adolescencia; Coordinación internacional del día de la Tierra; Red Latinoamericana de Acción Climática; Red Interamericana por la Democracia; Climate Action Network; Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable; y el Consejo Consultivo Mixto de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

En un estudio de Kurzinger (1991) realizado en México, el 75% de las OA analizadas tenía alguna liga con el Estado y el 30% recibía apoyos del mismo. Sin embargo, la participación de las organizaciones ambientales para la definición de las cuestiones operativas del acceso a la información no se da en las mejores condiciones, pues el comité ejecutivo está conformado de forma tal que tiene más peso la representación de los industriales. Otro problema para las agrupaciones sociales es la falta de recursos para cubrir los gastos de sus representantes, además de dárseles poco tiempo entre el momento de ser convocados a las reuniones y su realización.

El apoyo de la CCA es un factor importante para que las OA mexicanas le dieran seguimiento al Registro de Emisiones. Sobre todo, por los recursos económicos que proporcionó: 1) apoyó al grupo de la Neta de la ciudad de México para la creación de la página en Internet “Emisiones Virtuales” sobre residuos tóxicos y desarrollo foros de información sobre este tema; 2) financió al Colectivo Ecologista de Jalisco para desarrollar talleres para industriales para enseñarles a llenar los formularios gubernamentales del RETC; y 3) también apoyó al grupo Presencia Ciudadana Mexicana para publicar información y a convocar a conferencias sobre asuntos ambientales. Otros grupos que han recibido apoyo de la CCA son: Fronteras Comunes, Greenpeace México, CEMDA y Periodismo para Elevar la Conciencia Ecológica.

La lucha por el Derecho a la Información sobre desechos es parte de la búsqueda por la apertura general de la información gubernamental. En una reunión celebrada en febrero del 2001 en la Universidad Iberoamericana se consolidó una propuesta para una Ley de Transparencia Federal y Acceso a la Información. Un grupo de organizaciones y diferentes actores sociales formaron el Grupo Oaxaca a fin de impulsar este acceso a la información pública. A fines del 2003 se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

B. APUNTES TEÓRICOS SOBRE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y LA ESTRUCTURA DE LAS OPORTUNIDADES POLÍTICAS

Una teoría que nos permite ver las transformaciones de las formas de organización y de operación de los grupos civiles y los movimientos sociales es la Teoría de Movilización de Recursos (TMR).

El principio que está detrás de esta propuesta es en realidad simple: cualquier grupo de personas que busca organizarse o realizar una manifestación necesitar de una serie de “insumos o recursos”; tales como un mínimo de coordinación, de tiempo y un espacio para reunirse. El problema sin embargo, no termina ahí. Suponiendo que un grupo consiguiera lo necesario para poder organizarse, eso no significa necesariamente que podría hacer su manifestación o pueda constituirse en una agrupación. Un grupo contrario puede impedirles sistemáticamente cualquier intento de reunión e inclusive llegar a disuadirlos por medios violentos.

Por ejemplo, una empresa que no desea que sus trabajadores protesten por los daños físicos que sufren por trabajar con sustancias peligrosas. Por otra parte, nuestro supuesto grupo tiene que pensar en si la situación social en general sería o no propicia para sus demandas, pues pudiera darse el caso que la mayoría de la sociedad condenara sus demandas. Por ejemplo, una manifestación de “skinhead” en Israel o una marcha por salvar las ballenas en una crisis financiera en Argentina.

En la TMR se privilegia el cómo la gente se organiza y con qué recursos lo hace, restándole importancia al por qué se originan las acciones colectivas (Eyerman, 1991). La parte organizacional de los movimientos es resaltada dentro de esta perspectiva. Esto lo justifican argumentando que: la existencia de razones que son percibidas como injustas es una condición necesaria pero no suficiente para que se presenten acciones colectivas. Tiene más importancia la presencia de los repertorios necesarios para la organización y la acción (Tilly, 1973; Tarrow, 1997 y Traugott, 1995).

Es decir, si la gente no se involucra fácilmente en empresas colectivas donde se pone en riesgo su vida, ¿Qué condiciones se deben de presentar para que haya una movilización social? Para la TMR el disponer de un repertorio para las acciones colectivas es considerado el factor más significativo para explicar una movilización social. Tarrow (1997) describe así la preocupación principal de la TMR: “(El)...cómo coordinar a poblaciones desorganizadas, autónomas y dispersas de cara a una acción común y mantenida. Los movimientos resuelven el problema respondiendo a las oportunidades políticas a través del uso de formas conocidas, modular, de acción colectiva, movilizándolo a la gente en el seno de redes sociales y a través de supuestos culturales compartidos”.

La teoría de movilización de recursos no sólo nos permite analizar los medios de los que se valió un grupo para su acción, sino que implica conocer las redes que apoyan o luchan en contra; la influencia que un determinado estado general de la sociedad tiene para su actuación y cuáles son las consecuencias de la actuación del Estado para el movimiento.

Los recursos para una acción colectiva pueden ser tanto materiales como nomateriales, y su existencia es indispensable para que los diferentes actores consideren factible involucrarse en un movimiento social. Sin embargo, la mera existencia de los recursos no es suficiente. Es necesaria la existencia de algún grado, por mínimo que sea, de organización que controle y maneje la acumulación y el uso de dichos recursos.

La existencia de los recursos no se da en el “vacío”, sino que se dan en el contexto de un medio social y que resulta importante para el posible desarrollo de la acción colectiva. La Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) se refiere a los factores de tipo externo a la organización que favorecen el logro de sus objetivos. Sydney Tarrow define la “Estructura de oportunidades políticas” (EOP) como: “... dimensiones consistentes – aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales – del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre al gente. El concepto pone énfasis en los recursos exteriores al grupo –al contrario que el dinero o el poder-, que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o desorganizados” (Tarrow, 1995). Una de las características más importantes para Tarrow de los movimientos sociales es que pueden difundir las oportunidades políticas que crean o utilizan; no sólo hacia movimientos cercanos o complementarios a sus objetivos, sino inclusive, para grupos antagonicos o pertenecientes a la elite política.

Para aplicar la EOP para nuestros casos de estudio, retomaremos la propuesta de Hochstetler (2003) respecto a la necesidad de hacer dos adecuaciones dadas las condiciones específicas del caso Latinoamericano: 1) Los recursos monetarios provenientes de los países desarrollados son un fuerte factor para el desarrollo de una organización social en esta zona; 2) Existe un mayor peso del Estado como

condicionante importante de las EOP en el caso Latinoamérica que en los países del Norte.

Los recursos para la movilización con el paso de tiempo se institucionalizan y reproducen. La transformación de estas “rutinas” de acción se da en largos periodos de tiempo y en forma gradual. Generalmente su cambio está relacionado con innovaciones en los tipos de organización, en la aparición de nuevas elites y la presencia de “oportunidades” dentro de las relaciones de poder. En este sentido, la aparición de un movimiento social se relaciona con las “oportunidades políticas”; mismas que reducen los costos de participar, permiten identificar a aliados potenciales y muestran en que son vulnerables las autoridades (Tarrow, 1995 y 1997). Al mismo tiempo, es importante no perder de vista algunos aspectos del Estado que permanecen estables y sin lugar a dudas condicionan también la formación y la estrategia de los movimientos. Estos son:

a) La represión en Estados autoritarios. Tilly define represión como: “...cualquier acción por parte de un grupo que eleva el costo de la acción colectiva del contendiente. Una acción que reduce el costo de la acción colectiva es una forma de facilitación.” (Tarrow, 1994). La represión es parte de la definición de este tipo de Estados, sin embargo su aplicación crea un objetivo común dándole una connotación política a acciones cotidianas. Por otro lado, si bien la represión busca terminar con las acciones colectivas normales, es vulnerable a movilizaciones discretas.

b) Represión en los Estados no represores. Los sistemas representativos tienen una forma peculiar de eliminar y reprimir a los movimientos de oposición al permitir e incentivar la participación; de esta forma procesan los elementos más desafiantes de la política, canalizando la movilización hacia lo electoral, convirtiéndola así, en una acción controlada. Se crea así una paradoja: la libertad de manifestarse y la existencia de canales para hacerlo limita realmente las posibilidades de elección de la gente. La represión por otra parte, no es aplicada de forma homogénea por ningún estado, existen acciones colectivas que serán promovidas y otras castigadas o reprimidas.

C. LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y LA ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES POLÍTICAS DE LOS GRUPOS AMBIENTALISTAS EN MÉXICO Y ARGENTINA

Los Movimientos especializados en determinados objetivos (como lo ambiental), han sufrido una transformación importante en los recursos para su manifestación y formas de organización. A este respecto, la creación de las redes es un elemento principal. La aparición de estas organizaciones de segundo orden, que concentran a varias otras, busca terminar con el aislamiento en las acciones y constituirse en parte de un movimiento regional, nacional o supranacional. Este es el caso de las organizaciones contra los transgénicos en Argentina o la contaminación por las maquilas en México (Jelin, 2003).

En una región como la Latinoamericana, donde la pobreza, la violencia o la corrupción siguen siendo cuestiones prioritarias a resolver para el buen funcionamiento de la sociedad, la cuestión ambiental sigue ocupando un papel secundario. Esto no obstante, que hay un crecimiento significativo de los grupos preocupados por la cuestión ambiental en la región. Las redes funcionan como un lente de aumento de los recursos todavía en construcción de las organizaciones ambientales.

En la parte organizacional existen cuatro problemas importantes en el funcionamiento de las organizaciones civiles que se aplican a La RENACE y la RNDIA: 1) existe todavía una debilidad estructural, por el tamaño y monto de los recursos; 2) existen problemas organizacionales y gerenciales; 3) no existe una relación completamente institucionalizada y reglamentada entre las organizaciones civiles y el gobierno; y 4) la relación entre las organizaciones del norte y del sur es problemática en cuanto a los objetivos y enfoques Billis y Mackeith (1992). Una de las características de operación de las OA que forman parte de la RENACE y la RNDIA es el recurrir constantemente a estructuras de participación directa; con ello logran contar con una permanente retroalimentación sobre la eficiencia de los procesos con los que trabaja, y de esta modo, puedan ser mejorados. Esto admite un uso más eficiente de los recursos enfocándolos en los temas de interés para la misma población.

Las redes son un recurso que permite a una organización no pagar los altos costos que le significaría difundir por sí misma sus acciones o demandas; con ello, puede dar a conocer de forma inmediata sus problemas más urgentes. La RENACE (2003) en sus estatutos, contempla la posibilidad de que las organizaciones integrantes o nuevas puedan usar su boletín para difundir un problema que se considere de extrema urgencia. El caso mexicano por su parte, muestra cómo la construcción de un frente de presión mediante una red puede provocar un cambio en las decisiones sobre las políticas públicas. También enseña la importancia que las organizaciones ambientales de países como Estados Unidos o Canadá tienen para las OA de Latinoamérica.

Las OA integran un componente “físico” en sus demandas, esto es, lo ambiental se relaciona con cuestiones objetivas como la contaminación del agua, la polución o la desaparición de un bosque. Sin embargo, la mayoría de las veces resulta difícil construir una causalidad entre la aparición de un problema (aumento de casos de cáncer en una región) y sus causas directas (la operación de una planta de químicos en la región). La red puede ayudar a disminuir los costos que representa conseguir la información necesaria. Uno de los objetivos de RENACE es precisamente lo anterior: que las OA cuenten con un canal de flujo de información y de posibles aportes o participaciones que les permita construir las causalidades necesarias para sus objetivos o demandas. Otro costo asociado a la información es la “certidumbre”; las organizaciones no sólo necesitan datos, sino saber que los mismos son confiables. La participación en una red como el RENACE o la RNDIA, reduce el costo de incertidumbre.

Uno de los puntos por lo que las redes son un recurso estratégico emergente es debido a que, en general, las OA en México y Argentina consisten en pequeños grupos con presencia local, y limitada capacidad de negociación frente a los gobiernos. La RENACE y la RNDIA se constituyen como actores con más visibilidad para la negociación; así, una organización que por sí misma tendría poco impacto, puede potenciar sus recursos para la protesta. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la red ha logrado que miembros de diferentes organizaciones sean incluidos en negociaciones sobre asuntos ambientales y su opinión sea considerada al momento de designar al ministro del ramo.

Otra característica que hace a las redes un recurso valioso para el funcionamiento de las OA, es por que su funcionamiento no significa un gran costo; basta con un grupo coordinado (Keck y Sikkink, 1998). Esto le da a esta forma de organización una capacidad de funcionamiento y permanencia en situaciones de escasez, que permite,

entre otras cosas: mantener una “vigilancia” continua sobre las decisiones públicas sin aumentar los recursos necesarios para ello y coordinar rápidamente movilizaciones en momentos coyunturales, disminuyendo el costo que significaría para las organizaciones permanecer en movilización durante todo el tiempo. La RNDIA permitía a las diferentes OA monitorear la situación de los desechos industriales en diferentes ciudades, además de recibir información de las organizaciones norteamericanas y canadienses que el gobierno mexicano no les proporcionaba. En el caso de la RENACE, las organizaciones de regiones muy alejadas de la capital, pueden contar con información rápida sobre posibles decisiones del gobierno federal que las afecten, sin la necesidad de pagar el traslado hacia Buenos Aires.

Respecto a la estructura de las oportunidades políticas, como ya vimos, se compone de elementos del medio externo a la organización que facilitan o permiten su actuación. Primero analicemos los elementos estructurales más generales para pasar a los más locales.

Desde la Conferencia de Estocolmo, fue claro que existe una diferencia importante entre la definición acerca de qué se debe entender por el ambientalismo entre los países desarrollados y los países más pobres. En algunos casos esto ha significado que los proyectos específicos, apoyados con recursos de organizaciones de países desarrollados, se basen en modelos que no contemplan las características culturales o las necesidades específicas de la población concreta. Además de ser proyectos que, en la mayoría de los casos, no permanecen el tiempo necesario para institucionalizarse (Hjelmar, 1996).

La globalización coloca como una de las prioridades del gobierno para la concesión de proyectos, la eficiencia económica antes que la existencia de acuerdos amplios y la legitimidad de los procesos (Hochestetler, 2003). Sin embargo, este mismo proceso proporciona oportunidades políticas importantes como lo demuestra el caso mexicano; donde la firma de un tratado de comercio abre los canales de participación y relación con organizaciones externas. En este punto, es importante resaltar que algunas de las oportunidades políticas parecen “estar dadas”, mientras otras son construidas en terrenos donde no parecían existir.

El nivel regional es una parte crucial de la estructura de oportunidades políticas para los grupos ambientales, ya que proporcionan la posibilidad de contar tanto con recursos monetarios, como de información y enlace, así como grupos de presión ante agencias de desarrollo y gobiernos. En el caso de RENACE estas oportunidades son aprovechadas con la creación del observatorio latinoamericano. En el otro caso, la creación de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte constituye una coyuntura importante para las OA, pues fue un factor importante para el seguimiento de las demandas de la RNDIA.

En el caso del MERCOSUR, sus instituciones más importantes limitan las posibilidades de participación a los grupos ambientales, pues privilegian la participación de grupos empresariales y sindicales. En este sentido, Balbis (2001) sugiere que estos dos grupos han intentado limitar la participación de otros grupos sociales. Dentro del MERCOSUR, la participación de las OA se dio por medio del grupo de Trabajo No. 6, aunque fueron excluidos los grupos no-empresariales de las reuniones donde se tomaban decisiones (Hochestetler, 2003).

En lo nacional la transición hacia regímenes democráticos de la región favorece la participación de grupos ambientalistas por los canales institucionalizados. Esta situación presenta variaciones en cada caso. En Argentina, las reformas constitucionales de 1994 ampliaron las posibilidades de participación aunque comparativamente con otros países como Brasil, todavía escasean las oportunidades (Hochstetler, 2003). Sin embargo, recursos como las audiencias públicas y la coparticipación administrativa son instancias importantes para el acceso de la gente a las cuestiones ambientales. Las defensoras del pueblo también han sido utilizadas por estos grupos. Estos recursos ya han sido ocupados en luchas ambientales de grupos que pertenecen a la RENACE contra la instalación de tiraderos dentro de zonas periféricas a Buenos Aires y en la operación de una mina en la zona de Ezquiel.

En el caso de México, la apertura democrática creó visibles transformaciones en los mecanismos y oportunidades de participación. Uno de los grupos que han impulsado y sabido aprovechar estos cambios son las organizaciones civiles. Este tipo de organizaciones se han caracterizado por una alta capacidad de innovación en sus formas de actuación y desarrollo en sectores anteriormente de poca visibilidad como los de género, o los ambientales. Este es el caso de la RNDIA que impulsó, a la vez que se benefició, de la creación de un Instituto Federal de Acceso a la Información.

En el contexto de una revitalización política y administrativa de los municipios en México, las OA tienen en este ámbito altas posibilidades de participación en proyectos, además de su vocación de ver en lo local su área prioritaria de acción.

En el nivel federal, también existen instancias de consulta y participación entre OA y el gobierno. En este sentido, una de las diferencias entre los integrantes de la red de medio ambiente en los casos estudiados es la percepción que tienen sobre el trabajo con el gobierno. En el caso de Argentina, la mayoría de los integrantes entrevistados mostraba poco interés a trabajar con el gobierno debido a la desconfianza. Por su parte, en el caso mexicano, las organizaciones muestran una creciente disposición a colaborar con el gobierno. Sin embargo la relación de los grupos ambientalistas mexicanos no esta exenta de desencuentros y disputas por la falta de apoyo (Ávila, 1998).

Por último, la estructura de oportunidades políticas no sólo se refiere a los factores que aumentan la posibilidad de “éxito” de una organización, sino también a aquellos que lo hacen más “costoso” o difícil. En los casos estudiados, los factores adversos para la RENACE y la RNDIA son: 1) centrar sus actividades en el logro de objetivos inmediatos sin considerar la perspectiva del largo plazo; 2) las organizaciones privilegian la solución de problemas en áreas delimitadas, concentrando sus recursos en ello. Esto hace que se pierda la capacidad de mantener la perspectiva macro y obstruye la afinidad entre los objetivos generales y los locales de diferentes grupos; 3) los escasos recursos monetarios de muchas organizaciones no les permite pagar ningún tipo de remuneración a sus miembros, colocando a su participación en una permanente coyuntura frente a la necesidad de generar los medios necesarios para la subsistencia; 4) la falta de una definición política de muchos de las organizaciones puede convertir en una oportunidad política para grupos contrarios, partidos políticos y organismos del gobierno; 5) competencias entre los grupos por conseguir los exiguos recursos de que disponen. Situación que en ocasiones se acompaña de una pugna dispareja; 6) poca capacidad de crítica de las organizaciones en su relación con otro tipo de organizaciones; 7) falta de una revisión seria de las posturas adoptadas frente a grupos

tradicionales, indígenas y la “modernidad” (Quadri, 1991). Si bien es difícil generalizar todos los factores para ambos casos, la mayoría se presenta de una u otra forma en ambos.

CONCLUSIÓN

Podemos decir que en términos generales, existe una tendencia generalizada dentro del movimiento ambiental en México y Argentina para utilizar nuevos recursos para el logro de sus objetivos. Uno de los más importantes, son las formas de comunicación y transferencias de datos, en este sentido las redes son una alternativa. Este tipo de relaciones aumenta la visibilidad de los movimientos y su capacidad de presentar un frente contra una decisión gubernamental considerada perjudicial contra el ambiente.

Las OA en México y Argentina tienden a reunir las siguientes características; 1) cuentan con un número reducido de miembros permanentes; 2) existe un alto nivel educativo en sus miembros y sobre todo en la dirigencia; 3) tienen acceso a servicios de comunicación como teléfono e Internet; 4) combinan formas democráticas de participación con liderazgos colectivos que se combinan con fuertes liderazgos individuales.

Una de las transformaciones importantes que introducen las nuevas formas de organización en el caso latinoamericano, es la posibilidad de darle voz a grupos que tradicionalmente fueron relegados por organizaciones como los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones populares. Intereses como los de género, los del medio ambiente o los homosexuales logran generar espacios para plantear sus demandas.

Los miembros de las OA en América Latina comienzan a pasar de un discurso centrado en cuestiones locales para involucrarse en conflictos internacionales. Dos frases retomadas por Verduzco (2002) lo sintetizan muy bien: la primera era la bandera de muchos de los movimientos contra las industrias contaminantes: “No en mi patio trasero”, la que sigue es una nueva expresión al involucrarse en cuestiones fuera de las fronteras nacionales: “En ninguna parte del planeta”.

Por último, es necesario tomar en cuenta que las oportunidades políticas pueden ser usadas no sólo con fines “públicos” sino para la promoción de intereses privados. En este sentido, el aumento en la participación de organizaciones ambientales en las decisiones de gobierno tiene que ser objeto de una constante vigilancia. Pues si bien la mayoría tiene objetivos generales que pueden ser considerados de beneficio general, los medios utilizados pueden estar relacionados con intereses de grupo y no ser los de la mayoría de la población.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfie Cohen Miriam y Méndez Luis (2000), Maquila y movimientos ambientales. Examen de un riesgo compartido, México: UAM-Azcapotzalco.
- Ávila Patricia (1998), “Política ambiental y organizaciones no gubernamentales en México” en José Luis Méndez, (coord.), Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica, México: Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas - Miguel Ángel Porrúa.
- Balbis Jorge (2001), “La participación de la sociedad civil en la construcción del

MERCOSUR”, Montevideo: CLAEH, mimeo

Bobbio Norberto (1989), *Estado, Gobierno y Sociedad*, México: Fondo de Cultura Económica.

Billis, D and Mackeith, J (1992), “Growth and Change in NGOs: Concepts and Comparative Experience”, in M. Edwards and D. Hulme (eds), *Making a Difference: NGOs and Development in a Changing World*, London: Earthscan.

Bordt Rebecca (1998), *The Structure of Women’s Non-profit Organizations*, USA: Indiana University.

Collier David (1999), “El método comparativo: dos décadas de cambios”, en Sartori Giovanni y Morlino Leonardo (comp.), *La comparación en las ciencias sociales*, España: Alianza Editorial.

e-agenda (2001), Universidad Nacional de Lujan, No. 14, marzo, Argentina: <http://www.unlu.edu.ar/agenda/e-agenda14.htm>

Eyerman Ron y Andrew Jamison (1991), *Social Movements, a Cognitive Approach*, USA: The Pennsylvania State University Press.

García-Guadilla María Pilar (1994), “Movimientos sociales, desarrollo y democracia”, en García-Guadilla María Pilar Retos para el desarrollo y la democracia: movimientos ambientales en América Latina y Europa, Venezuela: Nueva sociedad.

García Sergio et al (1995), *Organizaciones no gubernamentales. Definición, presencia y perspectiva*, México: Foro de Ayuda Mutua- Demos.

Hjelmar Ulf, (1996), *The Political Practice of Environmental Organizations*, England: Avebury.

Hochsetler Kathryn (2003), “MERCOSUR, ciudadanía y ambientalismo” en Jelin Elizabeth (comp.), *Más allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales*, Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Jørgensen Lars (1996), “What are NGOs Doing in Civil Society?”, en Clayton Andrew, *NGO’s Civil Society and the State: Building Democracy in Transitional Societies*, United Kingdom: Intrac (The International Non- Governmental Organisation Training and Research Centre).

Keck E. Margaret y Sikkink Kathryn (1998), *Activistas sin fronteras*, México, Siglo Veintiuno Editores.

Kohen Beatriz (1998), “Poder ciudadano y las acciones de interés público”, en Bresser Pereira Luis Carlos y Cunill Grau Nuria, *Lo público no estatal en la reforma del Estado*, España: Paidós.

Klandermans Bert (1991), “New Social Movements and Resource Mobilization: The European and the American Approach Revisited”, en Dieter Rucht (editor), *Research on Social Movements. The State of the Art in Western Europe and the USA*, Frankfurt am Main and Boulder.

Kurzinger E, Hess, Lange, Lingnau, Mercker y Vermehren (1991), *Política Ambiental en México. El papel de las Organizaciones No Gubernamentales*, Berlin: German Development Institute.

Leff Enrique (1998), *Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder*, México: Siglo Veintiuno.

Liverman Diana, Varady Robert, Chávez Octavio, Sánchez Roberto (2002), *Temas ambientales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México: impulsores de cambio y respuestas de ciudadanos e instituciones*, México: El Colegio de México.

Moore Barrington (1996), *La injusticia: bases sociales de la obediencia y al rebelión*, México: UNAM.

Natal, A. (forthcoming), *The relation between NGOs and State*”, paper produce during the MacNamara Fellowship program of the World Bank.

Nuno Themudo, *Organisational environment and NGO structure in México and Portugal: what does the literature tell us?* (2000), Documentos de Discusión sobre el Tercer Sector, México: El Colegio Mexiquense.

Olvera Alberto J. (2003), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México*, México, Fondo de Cultura Económica.

Panbianco Angelo (1999), “Comparación y explicación”, en Sartori Giovanni y Morlino Leonardo (comp.), *La comparación en las ciencias sociales*, España: Alianza Editorial.

Pearce Jenny, (2002), “El desarrollo, las ONG y la sociedad civil: el debate y su futuro”, en Pearce Jenny (coord.), *Desarrollo, ONG y sociedad civil*, España, Intermón- Oxfam.

Provan Keith G. Y Milward H. Brinton (1995), “A Preliminary Theory of Interorganizational Network Effectiveness: A Comparative Study of Four Community Mental Health System”, *Administrative Science Quarterly*, No 41(1): 1- 33.

RENACE (2003), documentos internos.

Quadri De La Torre Gabriel (1991), “Una breve crónica del ecologismo en México”, en Martha Scheteingart y Luciano d’Andrea (comp.), *Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente*, México: El Colegio de México, México.

Sartori Giovanni (1999), “Comparación y método comparativo”, en Sartori Giovanni y Morlino Leonardo (comp.), *La comparación en las ciencias sociales*, España: Alianza Editorial.

Tarrés María Luisa (1981), “De la identidad al espacio público: las organizaciones no gubernamentales de mujeres en México”, en José Luis Méndez, (coord.), *Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica*, Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas, México: Miguel Angel Porrúa.

Tarrow Sydney (1997), *El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, España: Alanza Editorial.

- (1995), “Cycles of Collective Action; Between Moments of Madness and the Repertoires of Contention”, en Mark Traugott, *Repertoires and Cycles of Collective Action*, Duke University Press, Durham and London.

Tilly, Charles C (1973), “Does Modernization Breed Revolution?”, *Comparative Politics* 5, abril, UK.

- (1997), “Getting It Together in Burgundy”, *Theory and Society*, 4, pg. 479-504.

- (1995) “Contentious Repertoires in Great Britain”, in Mark Traugott (edit) *Repertoires and cycles of collective action*, USA: Duke University Press.

Trivedy Roy, Acharya Jagabandhu (1996), “Constructing the Case for an Alternative Framework for Understanding Civil Society, the State an the Role of NGOs”, en Clayton Andrew, *NGO’s Civil Society and the State: Building Democracy in Transitional Societies*, UK: Intrac (The International Non- Governmental Organisation Training and Research Centre).

Verduzco Chávez Basilio (2002), *Conflictos ambientales. La internacionalización de la defensa de las comunidades contra instalaciones contaminantes*, México: Universidad de Guadalajara.

Notas

1 Desde su fundación la RENACE ha tenido reuniones en: Mar de Plata (1986); Mendoza (1986); Neuquén (1987); Ezeiza (1987); Rosario (1988); El Bolsón (1989); Posadas (1989); Mar de Plata, (1990); Trenque Lauquen (1990); Buenos Aires (1991); Madryn (1991); Rosario (1992); Mendoza (1992); Zárate (1993); Resitencia Chaco (1993); Pilar (1994); El Bolsón (1994); El Pato (1995); Trelew (1996); Resistencia,

Chaco (1996); Tafí del Valle, Tucumán (1997); Villa General Belgrano, Córdoba (1997); Mar Chiquita, Buenos Aires (2001); Ushuaia, Tierra de Fuego (2002).

2 Por un tiempo, se realizaron “reuniones intermedias” entre OA de la misma región que necesitaban apoyo en temas específicos (RENACE, 2003).

3 La red sirvió como difusor entre los vecinos de las localidades cercanas a la ciudad de Buenos Aires en las cuales se busca establecer tiraderos de basura proveniente de la ciudad.

4 El día 8 de agosto de 2001 se firma un “Acuerdo entre la República de Argentina y Australia sobre cooperación en los usos Pacíficos de la Energía Nuclear”, varios grupos iniciaron una movilización para la anulación de toda iniciativa y compromiso comercial. Para esta fecha existe una coalición de 2002 organizaciones contra la importación de desechos radioactivos provenientes de Australia. En el 2003 se realizaron una serie de actividades en diferentes ciudades de Argentina buscando informar y concienciar a la población en general. Los eventos incluían: la instalación de carpas de información en ferias, recolección de firmas en plazas, presentación en programas radiales, teatralizaciones y remitir una carta al canciller de Australia.